



Floridablanca, treinta (30) de julio de dos mil veintiuno (2021)

TUTELA

RADICADO: 2020-00066  
ACCIONANTE: PEDRO LEONARDO MARTÍNEZ RUEDA  
APODERADO: JOSÉ ANTONIO FRANCO QUINTERO  
ACCIONADO: INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y  
TRANSPORTE DE COROZAL – SUCRE  
ASUNTO: SENTENCIA DE TUTELA

### ASUNTO

Se resuelve la acción de tutela interpuesta por el señor PEDRO LEONARDO MARTÍNEZ RUEDA, a través de apoderado contra el INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE COROZAL SUCRE, ante la presunta vulneración de su derecho de petición.

### ANTECEDENTES

- 1.- El apoderado del señor Pedro Leonardo Martínez Rueda expuso que el 2 de junio de la presente anualidad elevó a través del correo electrónico [sustanciadorcorozal@hotmail.com](mailto:sustanciadorcorozal@hotmail.com) una solicitud ante Instituto Municipal de Tránsito y Transporte del municipio de Corozal, Sucre, mediante el cual imploró copias, constancias y videos de las diligencias surtidas en la Inspección de tránsito de esa localidad por los comparendos impuestos a su poderdante. Pese a lo anterior, no recibió respuesta alguna, aun cuando se comunicó con la entidad e hizo seguimiento en la plataforma, motivos suficientes para deprecar el amparo de su derecho.
- 2.- Una vez se avocó conocimiento se vinculó al trámite tutelar al Director del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Corozal Sucre, quien guardó silencio dentro del término legal otorgado.
- 3.- El 28 de julio del año en curso se estableció comunicación telefónica con el apoderado del afectado quien afirmó que aún no recibe respuesta de la entidad demandada.

### CONSIDERACIONES

- 4.- La acción de tutela es un mecanismo de carácter constitucional, concebido como el medio más expedito y ágil para proteger los derechos fundamentales afectados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de particulares, el cual se caracteriza por ser un instrumento de naturaleza subsidiaria y residual, de ahí que sólo



procede ante la ausencia de otros mecanismos adecuados de defensa, o cuando sea utilizado como herramienta transitoria para evitar la configuración de un perjuicio de carácter irremediable.

5.- Atendiendo a lo consignado en el art. 37 del Decreto 2591 de 1991 y el numeral 1º del art. 2º del Decreto 1983 de 2017, este Juzgado es competente para conocer la presente acción de tutela, toda vez que el accionante reside en esta municipalidad y la acción está dirigida contra un organismo municipal como es el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Corozal Sucre.

6.- Conforme a lo previsto en los artículos 86 de la Carta Política y 10º del decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede presentarse directamente, a través de representante o agenciando derechos ajenos, de tal modo que el abogado José Antonio Franco Quintero se encuentra legitimado para interponerla en su calidad de apoderado del presunto perjudicado.

7.- De acuerdo a lo planteado por el accionante, el **problema jurídico** a resolver se restringe a determinar si el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Corozal Sucre menoscabó el derecho de petición del accionante no resolver la solicitud que elevó.

La **respuesta al problema jurídico** surge afirmativa, sin lugar a dudas la entidad demandada vulneró el derecho de petición, pues debió resolver de forma clara, concreta y de fondo la solicitud presentada, pero contrario a ello, decidió guardar silencio lo que denota la desidia en su actuar, incluso dentro del trámite tutelar, así que se tomaran por ciertos los hechos que constan en el libelo tuitivo, conforme el artículo 20 del decreto 2591 de 1991.

7.1. **Premisas de orden jurídico** sobre las cuales se soportan las afirmaciones anteriores.

7.1.1. La ley 1755 de 2015 por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, respecto del término para resolver peticiones lo siguiente:

“...Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos



documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes...2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción...PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto...”

7.1.2 Mediante Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministro de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró el estado de emergencia sanitaria per causa del nuevo Coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de esta, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos.

7.1.3. En virtud de lo anterior, a través del decreto 491 del 28 de marzo de 2020 por medio del cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas, el Presidente de la República dispuso lo siguiente:

“... Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: (i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción. (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.

7.1.4. La respuesta no está condicionada a ser resulta de forma positiva o se acceda de manera unánime a las pretensiones del accionante, al respecto la Corte Constitucional ha referido lo siguiente



“...la satisfacción de este derecho se encuentra condicionada a que la entidad emita y entregue al peticionario una respuesta que abarque en forma sustancial y resuelva, en lo procedente, la materia objeto de solicitud, independientemente del sentido. Ello quiere decir que la respuesta negativa comunicada al peticionario dentro de los términos establecidos no significa una vulneración del derecho de petición, puesto que si efectivamente lo contestado atiende de fondo el asunto expuesto se satisface el derecho mencionado. En efecto, la respuesta puede o no satisfacer los intereses de quien ha elevado la petición, en el sentido de acceder o no a sus pretensiones, pero siempre debe ser una contestación que permita al peticionario conocer, frente al asunto planteado, cuál es la situación y disposición o criterio de la entidad competente...”<sup>1</sup>

7.1.5. El artículo 20 del decreto 2591 de 1991 establece el principio de presunción de veracidad, el cual implica que si no existe respuesta de la entidad demandada que controvierta las afirmaciones del libelo tuitivo, se tendrá por cierto lo allí plasmado.

## 7.2. Premisas de orden fáctico

Ahora bien, se encuentra probado dentro del presente trámite constitucional porque se allegaron los medios de prueba para tal fin o no fue objeto de discusión entre las partes que:

- i) Conforme al soporte inserto en el escrito de tutela se establece que el 2 de junio 2021 el apoderado del señor Pedro Leonardo Martínez Rueda radicó vía correo electrónico una solicitud ante el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte del municipio de Corozal, Sucre;
- ii) Conforme lo afirmó el accionante pese haber tenido repetidas comunicaciones con la entidad y hacer seguimiento en su plataforma no recibió respuesta;
- iii) La afirmación del accionante, respecto a la ausencia de respuesta no fue controvertida por la entidad accionada, por el contrario guardó silencio dentro del término legal otorgado.

8.- **Conclusiones.** Al contrastar las premisas de orden fáctico con las glosas jurisprudenciales y legales, se logró dilucidar lo siguiente:

8.1. El núcleo esencial del derecho de petición se concreta en la respuesta clara, precisa y oportuna de lo pretendido, de nada serviría la posibilidad de elevar solicitudes frente a distintas autoridades u entidades, si se limitan a resolver de manera superflua lo pretendido.

---

<sup>1</sup>Sentencia T-908 de 2014, MP. Mauricio González Cuervo.



Ahora bien, ello no implica que la contestación deba ser favorable a los intereses de quien realiza el requerimiento.

8.2. Oportuna, quiere decir, dentro del término establecido, el cual de manera general es de 15 días, no obstante, conforme al art. 5 del decreto 491 de 2020 el término se expande a 30 días. Clara, concreta, precisa y de fondo, hace alusión a la calidad de la respuesta ya que no puede ser superflua. Además, debe ser puesta en conocimiento del peticionario. De lo contrario se vulnera el derecho constitucional.

8.3. Es evidente que la respuesta a la solicitud que se eleve no implica la aceptación de lo requerido, ni se concreta siempre en una respuesta por escrito.

8.4. En el caso concreto, de las pruebas allegadas al diligenciamiento puede concluirse que el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Corozal Sucre no otorgó respuesta a la solicitud elevada por el accionante, pese a que fue radicada desde el 2 de junio 2021 en el correo electrónico [sustanciadorcorozal@hotmail.com](mailto:sustanciadorcorozal@hotmail.com), conforme al soporte inserto en el escrito de tutela.

En consecuencia, como quiera que no existe respuesta oportuna ni de fondo respecto de lo implorado por el accionante y, la postura de la entidad no se encuentra justificada de manera alguna, incluso persistió dentro del trámite constitucional pues nuevamente guardó silencio, es claro que el amparo constitucional se muestra procedente ante la efectiva vulneración del derecho fundamental reclamado, máxime si la entidad mencionada nada aportó en su defensa, por ende, se ordenará al señor Director del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Corozal Sucre que en el término de 48 horas a partir de la notificación de la presente decisión – si aún no lo ha hecho - otorgue una contestación clara, concreta y de fondo a lo deprecado por el accionante, sin que la misma tenga que ser asertiva frente a lo irrogado.

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO SEXTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE BUCARAMANGA DESCENTRALIZADO EN FLORIDABLANCA– en tutela -, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

**RESUELVE:**



PRIMERO: **TUTELAR** el derecho de petición del señor Pedro Leonardo Martínez Rueda identificado con la cédula de ciudadanía 91'234.910 – quien actuó a través de apoderado -, conforme lo expuesto en la parte motiva de ésta decisión.

SEGUNDO: **ORDENAR** al señor Director del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Corozal Sucre que en el término de 48 horas a partir de la notificación de la presente decisión – si aún no lo ha hecho - otorgue una contestación clara, concreta y de fondo a la solicitud radicada el 2 de junio 2021 en el correo electrónico [sustanciadorcorozal@hotmail.com](mailto:sustanciadorcorozal@hotmail.com) por el señor Pedro Leonardo Martínez Rueda identificado con la cédula de ciudadanía 91'234.910 a través de su apoderado José Antonio Franco Quintero identificado con la cédula de ciudadanía número 1.098'749.591, sin que la misma tenga que ser asertiva frente a lo irrogado, so pena de incurrir en desacato por los términos del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: **NOTIFICAR** el presente fallo a las partes, conforme a los parámetros consagrados en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: **ENVIAR** el presente fallo a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no fuere impugnado.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

El Juez,

GABRIEL ANDRÉS MORENO CASTAÑEDA